



PONENCIA DEL
C.MTRO.LIC.GABRIEL GARCIA ROJAS.
C.SRIO.LIC.RAUL ORTIZ-URQUIDI.
D-3374/953/2a.-OLGA PADRON AGUILAR.

Vo.Bo.
El Ponente.

----- México, Distrito Federal. ACUERDO de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro. -----

----- V I S T O S; y, -----

----- R E S U L T A N D O -----

----- PRIMERO: Ante esta Suprema Corte, ocurrió Olga Padron Aguilar en demanda de amparo contra actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que estimó violatorios de las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y que hizo constar, el que reclama, en la sentencia que con fecha doce de junio de mil novecientos cincuenta y tres, pronunció dicha autoridad en el toca a la apelación relativo a la tercería excluyente de dominio promovida por su apoderado José González Carrillo, en el juicio ejecutivo mercantil seguido por Julio Amado Martínez en contra de Felicitas Salgado González. -----

----- SEGUNDO: Los antecedentes del caso, según los autos de primera y segunda instancias que se tienen a la vista, son los siguientes: José González Carrillo, como apoderado de hoy quejosa y por escrito de fecha veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, presentado ante el Juez de lo Civil de Irapuato, promovió la citada tercería con relación a la casa número catorce de la calle de Allende de la ciudad de Salamanca, expresando que en dicho juzgado radica el juicio ejecutivo mercantil que sobre el pago de la cantidad de veinte mil pesos que jamás dice, ha tenido el licenciado Julio Amado Martínez,

cuya actuación profesional, agrega, es muy conocida en Irapuato, promovió éste en contra de Felicitas Salgado González, quien se prestó a desempeñar el papel de demandada; que en dicho juicio se embargó la aludida casa mediante la diligencia de trece de agosto del mismo año, registrándose el secuestro en el Registro Público de la Propiedad con fecha veintiséis del propio agosto; que Felicitas Salgado, que en dicho juicio ejecutivo mercantil hace el papel de demandada, sería y verdaderamente celebró con la mandante del licenciado José González Carrillo, o sea el promovente de la tercería, un contrato de compraventa con relación a la citada casa número catorce de la calle de Allende, consignándose este contrato en la minuta que con fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno otorgan su citada mandante, como compradora, y la repetida Felicitas Salgado, como vendedora, ante la fe del Notario de Irapuato, licenciado Agustín Gutiérrez, inscribiéndose el citado documento en el Registro Público correspondiente, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y dos; que de esta minuta se desprende clara y expresamente la existencia del contrato de compraventa realmente celebrado entre ambas partes, ya que en ella se convino en el precio y en la cosa e inclusive la vendedora recibió, como consta en dicho documento, a cuenta de tal precio, la cantidad de tres mil quinientos pesos, obligándose la compradora a pagar el saldo de cuatro mil quinientos, en partidas de trescientos pesos mensuales, como lo ha venido haciendo, según se acredita con los recibos debidamente firmados por la vendedora y que el actor acompañó a su demanda, correspondientes a los meses de enero a junio de mil novecientos cincuenta y dos, en la inteligencia



de que los abonos correspondientes a los meses de julio a octubre, mes este último en que se presentó la demanda de tercería, han sido consignados judicialmente, como también se acredita con la certificación que acompaña, ya que la señora Salgado se ha negado a recibir dichos abonos; que independientemente de la simulación -- fraudulenta del procedimiento ejecutivo mercantil, cuya situación ya llevó al conocimiento del Procurador General de Justicia del Estado y cuya finalidad es defraudar a su mandante, el caso es que siendo ésta legítima propietaria del inmueble, ya que la venta es perfecta y obligatoria por haber habido convenio entre ambas partes en el precio y en la cosa, se ve en la necesidad de instaurar la repetida tercería, ya que, a mayor abundamiento, tanto el llamado acreedor Julio Amado Martínez como la llamada deudora Felicitas Salgado, tenían conocimiento legal de la existencia de dicho contrato, y -- con cuya interposición de tal tercería, dice que no solamente sale en defensa de los intereses de su mandante, sino que trata de evitar que se consume un delito. -- Corrido el traslado de ley, ni el licenciado Martínez -- ni la señorita Salgado González lo evacuaron, por lo -- que el juicio se siguió en su rebeldía, bajo el concepto de que solamente la parte actora rindió pruebas, consistentes éstas en los documentos que acompañó a su demanda y en las posiciones que le articuló a Felicitas Salgado y acerca de las cuales ésta fué declarada confesa por no haber comparecido a absolverlas. El juez a -- quo resolvió la tercería con fecha diez de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, mediante sentencia que concluye con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO: La parte actora no probó su acción.-SEGUNDO: La parte --

demandada no opuso excepciones.-TERCERO: No se decreta el levantamiento del embargo que en el juicio principal se practicó sobre la casa número catorce de la calle de Allende, de la ciudad de Salamanca, de esta Entidad, finca cuyas medidas y colindancias se expresan en el acta levantada con motivo de ese secuestro.

CUARTO: No se hace especial condenación en costas. --

QUINTO: Notifíquese". Inconforme la tercerista con dicho fallo, se alzó en su contra con el resultado de haberse pronunciado por la Sala responsable, con fecha doce de junio de mil novecientos cincuenta y tres, la sentencia que ahora se combate por medio del presente juicio de garantías y que confirmó en todas sus partes la apelada. - - - - -

----- TERCERO: La demanda de amparo fué presentada ante la autoridad responsable el día veintinueve del citado mes de junio, con la copia certificada del fallo combatido. Se admitió dicha demanda en este Alto Tribunal por auto de diecinueve de agosto siguiente, que fué notificado por lista a los interesados el veintiocho del mismo mes. Con el informe justificado rendido por la responsable se recibieron los autos de primera y segunda instancias, expresándose en el oficio relativo que los terceros perjudicados fueron oportuna y legalmente emplazados. El Ministerio Público por medio de su pedimento de cinco de septiembre del propio año, formuló su parecer en el sentido de que se abstiene de intervenir en este asunto por carecer de interés público. El veintitrés del mismo mes se pasaron estos autos al señor Ministro ponente para la formulación del proyecto respectivo; y, - - - - -



----- C O N S I D E R A N D O : -----

---- PRIMERO: La existencia del acto reclamado se acredita con el toca original enviado por la responsable y en el cual aparece dictado el fallo en que aquél consiste.

---- SEGUNDO: En esencia estima la quejosa que el aludido fallo vulnera en su perjuicio las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la autoridad que lo pronunció, desentendiéndose de que el contrato de compraventa es esencialmente consensual y de que las partes que firmaron la llamada minuta de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno convinieron en el precio y en la cosa, y que por tanto lo que en realidad consignaron en dicha minuta es un verdadero contrato de compraventa que acredita que la propietaria del inmueble materia de la tercería es la hoy quejosa, no obstante lo cual la repetida autoridad estimó lo contrario, pues sostuvo que lo único a que tiene derecho dicha quejosa es al otorgamiento de la escritura de compraventa, pero no a que se le considere propietaria hasta entre tanto no obtenga la escritura, en razón de lo cual la multicitada responsable declaró que no está demostrada la acción de tercería; es claro que de este modo la propia autoridad le comete las aludidas violaciones constitucionales, dice, porque de tal modo violó también en su perjuicio los artículos 1272, 1273, 2811 y 2818 del Código Civil de Guanaajuato.

---- TERCERO: Es efectivamente cierto que la autoridad responsable sostuvo el anterior criterio que se le atribuye, como puede verse en el considerando tercero

- del fallo que se le combate y que literalmente dice:
- "TERCERO: El artículo 2818 dos mil ochocientos diecio-
- cho del Código Civil, dispone que la venta es perfec-
- ta y obligatoria para las partes por el solo convenio
- de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera
- no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, y el
- artículo 2920 dos mil novecientos veinte del mismo Or-
- denamiento, previene que el contrato de compraventa -
- no requiere para su validez formalidad alguna espe- -
- cial, sino cuando recae sobre cosa inmueble. Ahora --
- bien, si por razones de orden público, se exige que -
- los contratos de compraventa que tengan por objeto --
- bienes inmuebles, se consignent en escritura pública -
- o privada, según el precio de la venta, no por esto -
- pueden desconocerse los convenios entre partes, cuan-
- do se ha omitido aquel requisito, siempre que consten
- en forma auténtica o puedan ser comprobados debidamen-
- te, para hacerlos valer. La venta de inmueble no tie-
- ne existencia jurídica mientras no se haya llenado el
- requisito de la escritura; pero la obligación de otor-
- gar ésta, existe desde el momento en que se contrata
- y pueda exigirse a la parte que se rehusa a llenar --
- tal requisito, que lo llene, siempre que el convenio
- pueda ser comprobado por cualquiera de los medios re-
- conocidos por la ley. El derecho a la compraventa na-
- ce desde el momento en que existe el convenio, y como
- todo derecho trae consigo la acción correspondiente -
- para hacerlo efectivo, es incuestionable que cada uno
- de los contratantes puede exigir del otro, el otorga-
- miento de la escritura respectiva que la ley requiere.
- Sin la escritura no existe el contrato de compraventa,



pero si el derecho de exigir que se lleve a cabo con arreglo a la ley. Esta es la interpretación que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a los preceptos legales invocados, en diversas ejecutorias, entre las que puede citarse la publicada en la página 706 setecientas seis del Tomo LXXXVII ochenta y siete del Semanario Judicial de la Federación. De acuerdo con el criterio expuesto, que acepta esta Sala, debe afirmarse que desde el momento en que existió convenio entre las señoritas Felicitas Salgado González y Olga Padrón Aguilar en cuanto a la cosa y el precio, nació el derecho a la compraventa del inmueble objeto del convenio y cada uno de los contratantes puede exigir del otro el otorgamiento de la escritura que la ley requiere, una vez que la compradora cumpla la condición señalada en el punto b) de la cláusula cuarta del convenio respectivo, pero la venta no tiene existencia jurídica mientras no sea llenado el requisito de la escritura, porque sin ésta no existe el contrato de compraventa sino el derecho de exigir que se lleve a cabo con arreglo a la ley, siendo hasta entonces cuando podrá estimarse transferido el dominio de la casa número 14 catorce de la calle de Allende de la ciudad de Salamanca, Gto. en favor de la señorita Olga Padrón Aguilar, ya que es inexacto que éste se haya transferido desde el momento en que se extendió la minuta relativa, independientemente del otorgamiento de la escritura pública correspondiente, como lo pretende el apelante, pues de aceptarse su opinión se llegaría a la conclusión de que carecería de objeto elevar a escritura pública

blica la minuta en que se hizo constar el convenio, si ésta produjera los mismos efectos que aquélla, contrariando lo dispuesto en los artículos 1279 mil doscientos setenta y nueve, 2920 dos mil novecientos veinte y 2924 dos mil novecientos veinticuatro del Código Civil. ---

- Acorde con la tesis expuesta existe la jurisprudencia
-- de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi
-- cada bajo el número 700 setecientos, en la página 1249
- mil doscientos cuarenta y nueve del Apéndice al Tomo -
- XCVII noventa y siete del Semanario Judicial de la Fe-
- deración, en la que se sustenta el criterio de que "el
- tenedor de una minuta no tiene más derecho, ni preten-
- de que su contexto debe surtir todos los efectos lega-
- les, que el de exigir a la otra parte contratante que-
- esa minuta se eleve a escritura pública; y mientras es-
- ta formalidad no se llene, el contrato no está perfec-
- cionado, ni el adquiriente investido de los derechos -
- que le puede conceder el convenio concertado, inclusi-
- ve poder registrarlo". - - - - -

---- CUARTO: A fin de establecer si es fundado o no el
-- concepto de violación sintetizado en el considerando -
-- segundo de este fallo en función de lo sostenido por -
- la autoridad responsable en la anterior transcripción,
-- precisa ante todo establecer que aún cuando la escritu-
ra que con fecha diecinueve de diciembre de mil nove-
- cientos cincuenta y uno firmaron ante notario la hoy -
-- quejosa Olga Padrón Aguilar y la señorita Felicitas --
Salgado González, se le hizo llamar minuta, ésta sin -
-- embargo, consigna un típico contrato de compraventa a
- plazos, atentos los términos de los artículos 2811, --
2818 y relativos del Código Civil de Guanajuato, ya -



que aparte de dicha forma y plazos fijados para el pago del precio, hay concierto de voluntades en el mencionado precio (ocho mil pesos) y en la cosa (la casa número catorce de la Calle de Allende de la ciudad de Salamanca) y por ese solo hecho la venta es perfecta y obligatoria para las partes al tenor de tal artículo 2818. Y se dice que se está en presencia de un típico contrato de compraventa a plazos y no de una simple minuta, en primer lugar, porque si con este término no se pretende designar un contrato especial, o sea el de "minuta", dicho contrato no existe reglamentado en la ley; en segundo lugar, porque este Alto Tribunal en el amparo en revisión número 3179/949/1a., promovido por Carmen Huerta y coagraviados y cuya ejecutoria se ve publicada en las páginas 1376 a 1378 del Tomo CIV del Semanario Judicial de la Federación, ha resuelto que no es verdad que los efectos que surte una minuta de compraventa se contraigan limitativamente a la obligación de otorgar la escritura correspondiente, máxime cuando, como en el caso, el vendedor recibe parte del precio y hace entrega de la cosa al comprador, dejando en esa forma integrados los elementos esenciales del contrato de compraventa; y en tercer lugar, porque si con el empleo del repetido término lo que se quiere es significar que la minuta es una simple promesa, para que ésta existiera, atenta la doctrina, la jurisprudencia y las disposiciones que brinda el derecho comparado, como por ejemplo las consignadas en los artículos 2243 al 2247 del Código Civil del Distrito Federal, que aquí se invocan como meras citas de tal derecho comparado (en la legislación guajaratense no existe esta reglamentación) sería nece-

sario que las partes asumieran contractualmente la obligación de celebrar la compraventa limitando esa obligación a cierto tiempo, pero no en el caso en que aparte de la existencia de tal acuerdo de voluntades en el precio y en la cosa, se facultó a la compradora para que pagara el precio en abonos, y no sólo, sino que de ese precio, en el momento mismo de la firma del contrato, dicha compradora le entregó a la vendedora y ésta recibió "la cantidad de tres mil quinientos pesos, a cuenta del precio de la venta y por lo mismo le extiende en la presente cláusula (la tercera) el más formal recibo por esta cantidad", estableciéndose en la propia cláusula que "los cuatro mil quinientos pesos faltantes los pagará la señorita compradora a la vendedora en abonos de trescientos pesos mensuales a partir del día primero de enero de mil novecientos cincuenta y dos, fecha en que se hará el primer abono para seguirse haciendo los demás el día primero de cada mes contra recibos que expedirá la vendedora"; constando en el propio documento (inciso "c" de la cláusula cuarta) -- "que la compradora tendrá derecho a habitar la casa ella y su familia", como de autos aparece que la ha venido habitando, puesto que en el poder general que la repetida compradora, señorita Padrón Aguilar, otorgó al licenciado José González Carrillo, promovente de la tercería, consta que aquélla tiene su domicilio en la citada casa número catorce de la calle de Allende de la ciudad de Salamanca. De manera, pues, que así las cosas, y porque además en la cláusula primera del propio documento expresamente se dice que "la señorita Felicitas Salgado González vende a la señorita Olga Padrón Aguilar en la cantidad de ocho mil pesos, libre de gravámen, al corriente en contribuciones y obligándose al saneamiento para el caso de evicción, y la señorita Padrón Aguilar compra y adquiere para sí la -



casa número catorce, antes diez, de la calle de Allende, manzana primera, cuartel cuarto de la ciudad de Salamanca, Estado de Guanajuato," es claro que la venta que dió perfecta al tenor del repetido artículo 2818, que dispone que aquélla es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, y con más razón en el caso en que dicha entrega de la cosa fué efectuada y del precio se llegó a satisfacer gran parte de él, constituida por los tres mil quinientos pesos entregados por la compradora a la vendedora en el momento de la diligencia, y por las diversas cantidades de trescientos pesos que ésta fué recibiendo durante los meses de enero a junio de mil novecientos cincuenta y dos, según aparece de los recibos suscritos por ella y que la compradora exhibió en la tercería, con la circunstancia de que tales recibos se tuvieron por reconocidos por parte de la propia vendedora, según declaración judicial constante a fojas cincuenta y tres de los autos de primera instancia, hecha a solicitud de la actora por no haberse presentado la señorita Felicitas Salgado a la diligencia de reconocimiento para la cual se le citó oportuna y legalmente.

-- Autoriza a establecer, en los términos antes dichos, la naturaleza jurídica del mencionado contrato, la interpretación a contrario sensu del artículo 1324 del invocado Código Civil de Guanajuato, puesto que si este precepto dispone que es nulo el contrato cuando, por los términos en que está concebido, no puede venirse en conocimiento de cuál haya sido la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal -

de la obligación, es lógico concluir, haciendo uso de tal medio interpretativo, que es válido el contrato - cuando por sus propios términos se viene en conocimiento de cuál ha sido tal intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal de la obligación, y que en el caso esa es precisamente la conclusión a la que se llega con vista de los términos en que está redactado el documento y que claramente ponen de manifiesto la real y verdadera intención de quienes lo suscribieron, puesto que no basta que éstas hayan llamado a dicho documento minuta, para que realmente lo sea, - cualquiera que fuere la significación que a este término se le pretenda dar, pues por las consideraciones antes hechas, concluyentemente se ve que su intención -- evidente fué la de adquirir la una la cosa, en cuya posesión se encuentra, según ya se dijo, y la otra el -- precio, para cuyo pago se autorizaron los abonos en la forma en que el propio contrato lo establece en su cláusula tercera; consideraciones todas éstas relativas al establecimiento de la naturaleza jurídica del repetido contrato, que por otra parte encuentran su apoyo, en lo esencial, en la tesis sustentada por este Alto Tribunal en la ejecutoria Reyes María, que se vé publicada en -- las páginas 1343 y siguientes del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, y en las pronunciadas -- por esta Sala los días diecinueve de junio de mil novecientos cincuenta y tres, en el juicio de amparo directo número 610/953/2a., promovido por José Angel Leal, y veintiuno de agosto del mismo año, en el juicio de amparo directo número 2809/952/1a., promovido por Amalia López, tesis según la cual el nombre no hace el contrato, sino que la esencia de éste está más allá de la autonomía individual y depende de la naturaleza de las cosas



5
dado que las definiciones legales de los actos jurídicos no están a la disposición arbitraria de las partes, sino que pertenecen al orden público de la Nación.

--- QUINTO: Establecido lo anterior acerca de la verdadera naturaleza jurídica del contrato en cuestión, y entrando ya al examen del concepto de violación hecho valer y sintetizado en el considerando segundo de este fallo, debe decirse que estándose en presencia, como se está, de un típico contrato traslativo de dominio, como es el de compraventa que se ha examinado, y en virtud del cual la propiedad de la casa embargada en el juicio ejecutivo mercantil con fecha trece de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, ya había sido transmitida con anterioridad a la tercerista por la demandada en dicho juicio, señorita Felicitas Salgado González, mediante el citado contrato de compraventa a plazos de fecha diecinueve de diciembre del año anterior, que se inscribió en el Registro Público el veinticinco de junio del año siguiente, es claro que en tal forma la tercerista acreditó en el juicio del que emana el acto reclamado la acción de tercería que al respecto ejercitó, y por ello mismo es concluyente que las violaciones alegadas son fundadas, por cuya razón debe otorgársele el amparo, sin que en contrario obste lo sustentado por la responsable en su fallo combatido en el sentido de que "la venta no tiene existencia jurídica mientras no sea llenado el requisito de la escritura, porque sin ésta no existe el contrato de compraventa sino el derecho de exigir que se lleve a cabo de acuerdo con la ley, siendo hasta entonces cuando podrá estimarse transfe-

12

rido el dominio de la casa número catorce de la calle de Allende de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en favor de la señorita Olga Padrón Aguilar, porque, en primer lugar, la institución de la inexistencia, como forma de invalidez de los actos jurídicos, no se encuentra reglamentada por el Código Civil de Guanajuato, que es el mismo de 1884 del Distrito Federal, ya que en dicha legislación solamente se reconocen como formas de tal invalidez la nulidad absoluta y la nulidad relativa, siendo la que se origina en la falta de forma, como en el caso, una nulidad de este último tipo (es decir, relativa, aún cuando técnicamente es más bien un caso de ineficacia) como ampliamente lo reconocen la doctrina y la jurisprudencia y en el caso concreto el artículo 1679 del repetido Código Civil de Guanajuato, ya que en el contexto de éste expresamente se establece que la ratificación y el cumplimiento voluntario de una obligación nula por falta de forma, en cualquier tiempo en que se hagan extinguen la acción de nulidad, y es bien sabido que es de la esencia de las nulidades absolutas que nunca pueden ser convalidadas ni por ratificación ni por cumplimiento voluntario, como tampoco por prescripción; por lo que si en el caso ha habido tal convalidación precisamente porque las partes con su comportamiento han ratificado su intención, la una de vender la casa, y la otra de adquirirla, comportamiento consistente en la ocupación del inmueble por parte de la compradora, en la entrega que ésta hizo a la vendedora de los tres mil quinientos pesos que ésta recibió en el momento de la celebración del contrato, y en las diversas cantidades que como abonos parciales de trescientos pesos mensuales fué recibiendo la misma vendedora durante



los citados meses de enero a junio de mil novecientos cincuenta y dos, es evidente que dicha acción de nulidad ha quedado extinguida, y si de acuerdo con la ley la adquirente tiene el derecho de exigir el otorgamiento de la escritura definitiva, esto no quiere decir que el contrato no exista, (al contrario, tiene ese derecho precisamente porque el contrato existe) - como superabundantemente se ha demostrado en todo lo considerado anteriormente. - - - - -

---- Por tanto, y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II, III y V, de la Constitución Federal, 45, 158, 186 y 190 de la Ley de Amparo, y 26, fracción III de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: - - - - -

---- UNICO: La Justicia de la Unión ampara y protege a Olga Padrón Aguilar contra la sentencia que con fecha doce de junio de mil novecientos cincuenta y tres, pronunció la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca a la apelación relativo a la tercería excluyente de dominio promovida por la quejosa en el juicio ejecutivo mercantil seguido por el licenciado Julio Amado Martínez en contra de la señora Felicitas Salgado González. - - - - -

---- Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad designada responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente. - - - - -

---- Así por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Rafael Rojina Villegas, Hilario Medina, Gabriel García Rojas, quien fué ponente, y Presidente José -- Castro Estrada, contra el voto del señor Ministro Vicente Santos Guajardo, que negó el amparo, lo resolvió

-16-

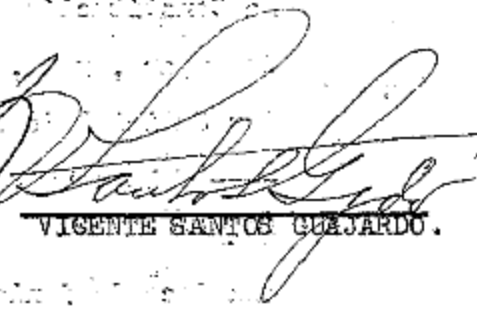
la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Firman los expresados Presidente y Ministros con el Secretario de Acuerdos de la Sala que da fé. -

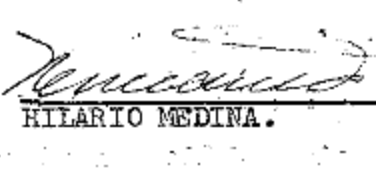
EL PRESIDENTE:


JOSE CASTRO ESTRADA.

LOS MINISTROS:


RAFAEL ROJAS VELLEGAS.


VICENTE SANTOS GUJARDO.


HILARIO MEDINA.


GABRIEL GARCIA ROJAS.

9 EL SECRETARIO DE ACUERDOS:


ABELARDO CARDENAS MAC-GREGOR.

30 ABR 1954

En por lista de la misma fecha se
ratificó la resolución anterior, a los interesados
al Ministerio Público Federal.

